

## **GRUPO DE TRABAJO DEL COMISIONADO PARLAMENTARIO**

*(Reunión celebrada el 26 de abril de 2024).*

**SEÑORA PODESTÁ.-** Les voy a pasar un papel en el que les pido que nuevamente coloquen su nombre, la institución y el contacto para poder tener un control de asistencia. Al mismo tiempo, vamos a repartir un documento que básicamente es un resumen de algunos hallazgos del mecanismo y que también ha sido visto por el comisionado.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Soy Jimena Fernández, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Estaría bueno que nos presentáramos uno por uno antes de comenzar.

El resumen sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un documento mártir como para poder comenzar un diálogo con relación a las primeras preguntas que habíamos dicho que íbamos a tratar de responder entre esta reunión y la próxima.

**SEÑOR PETIT.-** Soy el comisionado parlamentario.

Antes de hacer la ronda de presentaciones, quiero decir que me alegra mucho esta segunda reunión porque demuestra que la bola de nieve se va moviendo y creciendo.

Es muy importante lo que estamos trabajando. Además, muchos de ustedes están trabajando directamente en unidades y con situaciones que todos sentimos que requieren de una nueva institucionalidad. En nuestra oficina hemos tenido reuniones con dirigentes políticos de todos los partidos que nos han hecho consultas a partir de nuestros informes. Muchas veces nos preguntan cuál es el gran problema. En realidad, el gran problema es uno que reúne a todos los problemas y es la necesidad de una institucionalidad diferente, que será de lo que hablaremos en estas sesiones. Tenemos

una institucionalidad heredada de muchos años, que viene de la época de aquella división de las jefaturas departamentales. Luego se creó el INR, pero aún no termina de desplegarse del todo y con todas las posibilidades.

En algunas presentaciones se planteó una sana inquietud en el sentido de que podía resultar complicado firmar o aprobar el documento final porque no iba a representar necesariamente el punto de vista del organismo, pensando en que podía haber elementos polémicos o que no estuvieran en línea con la política del organismo. En realidad, es una preocupación que, estoy seguro, debe tener todo el mundo; por lo menos yo siempre la he tenido integrando comisiones de trabajo. Uno integra una comisión porque su jerarca lo nombra, pero en realidad no sabe si después va a contar con el visto bueno del organismo ni si se va a estar de acuerdo con el texto final y con los demás integrantes de la comisión.

Vuelvo a decir algo que hablamos en la reunión pasada e insisto en ello ya que hay algunos que no estuvieron presentes. El objetivo del documento no es entrar en el detalle ni en la solución de los problemas más agudos. O sea, no pretende referir a la modificación de tal artículo de la ley, salvo que lo acordemos, lo que es algo ineludible. No se trata de un documento más –y creo que así lo imaginamos casi todos– en el sentido de que vaya a plantear una generalidad que no diga nada. Tampoco puede ser un documento que moleste, irrite y cuestione lo que están haciendo los organismos en este momento, es decir, lo que pueden, con los recursos y los mandatos que tienen. Acá pensamos en un documento de líneas a futuro, de cambios institucionales y estratégicos, de temas a tratar, de realidades que no deben ser olvidadas y de nuevos asuntos que pueden ser incorporados, así como de nuevas contrapartes y mecanismos. No es un documento de monitoreo de derechos humanos en el sentido de denuncia o de plantear una situación inaceptable en tal lugar o lo que fuera. Justamente, creo que es el punto de unión de todos los que estamos acá, que tenemos un mandato de derechos humanos

común, con distintos roles y competencias. El gran desafío es si, pese a esa diferencia de mandato y de competencia, esa unicidad con respecto al mandato común de derechos humanos nos permite llegar a algo que pueda ayudar.

La gente del sistema político con la que he hablado ve con muy buenos ojos un documento –que no va a ser el único ya que habrá otros– que fue realizado por gente que está trabajando en el territorio y que se pone de acuerdo en algunos grandes lineamientos. Como ustedes saben –lo digo para que no se estresen muchos de los que se están sumando hoy–, no vamos a hacer una comisión de redacción del documento. Contamos con una secretaría técnica –integrada por Gianina Podestá, Graciela Riephoff y Santiago Sosa– encargada de recoger todo lo que se diga –incluso los insumos de algunas personas que hoy no van a venir, pero que nos van a contestar las preguntas mediante documentos–, y buscará después esos puntos en común. Asimismo, podremos anexar las versiones taquigráficas y todo lo demás.

Simplemente, quiero decir esto como marco; no sé si coincide con la visión de los demás colegas.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Por lo menos en el caso de la institución, era lo que se había hablado la vez pasada. Va a ser un documento general y de acuerdos.

Comenzaremos con una ronda de presentación. Luego haremos un breve recordatorio sobre lo que eran las preguntas y nos referiremos al documento que trajimos.

Soy Jimena Fernández, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

**SEÑORA PODESTÁ.-** Soy Gianina Podestá y represento a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

**SEÑOR MALVÁREZ.-** Soy Juan José Malvárez, director general de la Dinali.

**SEÑORA CAGGIANO.-** Soy Valeria Caggiano, representante de Anong.

**SEÑOR ROSANO.-** Soy Fabián Rosano, director nacional de Supervisión de Libertad Asistida, del INR, Ministerio del Interior.

**SEÑORA SALINAS.-** Soy la licenciada Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación.

**SEÑOR CAMARGO.-** Soy el comisario Jorge Camargo, director del Centro de Formación Penitenciaria del Instituto Nacional de Rehabilitación.

**SEÑORA LACUESTA.-** Soy la licenciada Patricia Lacuesta, adjunta a dirección de SAI-PPL.

**SEÑOR RECALDE.-** Soy Wilfredo Recalde, subdirector de SAI-PPL.

**SEÑORA RODRÍGUEZ.-** Soy Gabriela Rodríguez, presidenta de la asociación Familias Presentes.

**SEÑOR CONDE.-** Soy el comisario mayor, doctor Celestino Conde, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial.

*(Intervención fuera de micrófono).*

**SEÑORA RIEPHOFF.-** Soy Graciela Riephoff, soy asesora en la oficina del comisionado parlamentario.

**SEÑOR PETIT.-** Soy Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Quiero decir que aún no están presentes, pero confirmaron asistencia de la Junta Nacional de Drogas.

**SEÑOR PETIT.-** Rafael Paternain hoy no pudo venir, pero en la próxima reunión estará presente. Me pidió si le podíamos enviar las preguntas para traer material escrito.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Se las enviamos.

Para quienes no estuvieron la vez pasada, aclaro que los vamos a estar sumando a un grupo de WhatsApp para simplificar el envío de documentos.

Habíamos quedado que entre esta reunión y la próxima, que va a ser el 17 mayo, íbamos a estar intentando contestar o dialogar en torno al primer grupo de preguntas que tenían que ver con la superpoblación y el hacinamiento.

Decíamos que el crecimiento sostenido de la población penitenciaria en las últimas décadas ha generado un extendido problema de superpoblación en el sistema penitenciario y el hacinamiento crítico en la mayoría de los establecimientos. Establecimos tres preguntas. ¿Qué medidas considera prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario? ¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas en la privación de libertad? Por último preguntamos qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso y la reincidencia en la cárcel, y pusimos entre paréntesis: suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención de penas y políticas sociales, entre otras.

Los técnicos de la institución hicieron un documento –el que les distribuimos–, que es absolutamente mártir y que simplemente apunta a facilitar el inicio de la charla. Ahora Gianina Podestá les va a hacer un breve resumen.

**SEÑORA PODESTÁ.-** El documento tiene tres páginas y por eso lo del resumen.

Básicamente, se mencionan las cuestiones que rodean el hacinamiento. Se hace referencia a la dificultad o a la necesidad de poder dar alguna definición más específica sobre el tema de las plazas. Más cupos no es lo mismo que más camas, y esto es uno de los puntos de discusión que, seguramente, hemos tenido la mayoría de los que estamos acá en la interna de los organismos de los que formamos parte. El aumento de plazas por sí solo no es una solución. También está la problemática surgida a raíz de las leyes que han impactado en forma negativa en el incremento de la población privada de libertad en los últimos tiempos. Está la necesidad de una mayor utilización de medidas alternativas, de una mayor inclusión de las familias en los distintos programas y situaciones que se puedan disponer en la privación de libertad. Se plantea la posibilidad

de una mayor utilización de las alternativas, como la redención de la pena y la dotación de mayor personal y presupuesto, a efectos de poder obtener una ratio más apropiada entre las personas privadas de libertad y los funcionarios. Esto tendría una incidencia directa en la cuestión de la educación, porque existen muchas situaciones en que las personas privadas de libertad no pueden acceder a programas educativos puesto que no hay una cantidad suficiente, y en otros casos porque no hay una mínima cantidad de personal para acompañarlas en el trayecto.

Se entiende que este es un documento mártir y que estas son algunas de las identificaciones que ha hecho el equipo del mecanismo cuya función, en definitiva, es la realización de visitas y la identificación de determinados patrones o situaciones que necesitan ser cambiados. Nada más que eso.

Si bien es bastante descriptivo y la mayoría de nosotros lo conocemos, tal vez es como un puntapié inicial para la discusión.

**SEÑORA RODRÍGUEZ.-** Deseo hacer una sugerencia. Aunque esto se terminó hace dos horas, de pronto puede estar bueno que lo recibamos con un poco de anticipación a la reunión para poder darle una lectura serena.

Por otro lado, trajimos algunas copias del informe-resumen que hicimos. Creo que son siete u ocho copias, y una por institución alcanzaría; simplemente para tenerlo como material, sin desmedro de que después se pueda enviar por correo el informe completo.

**SEÑORA RIEPHOFF.-** Creo que lo tengo, pero si quieren, después lo podemos distribuir.

*(Dialogados).*

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** La idea es el disparador; después iremos a la pregunta uno y arrancamos. Es simplemente eso; capaz que dejamos que miren esto unos minutitos.

*(Dialogados).*

–La primera pregunta –y podemos hacer una ronda, si les parece bien, simplemente de primeras impresiones– era qué medidas se consideran prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario.

Queremos empezar por ese lado, si les parece bien.

**SEÑOR MALVÁREZ.-** Simplemente quiero decir que el tema de mayor *expertise*, por lo menos desde donde yo estoy, es trabajar con los que salen o los que están en el último tramo de su privación de libertad, próximos al egreso.

No quiero, tampoco, hablar de cuestiones que no sé, pero simplemente de lo que he podido ver y de lo que uno intercambia, en general, puedo decir que cuando uno va a las unidades, con las distintas direcciones o de lo que uno observa en la realidad de nuestra institución en cuanto a qué tipo de personas están llegando y qué tipo de delitos cometieron, advierte un aumento que ha sido favorecido en parte, también, por algunas modificaciones legales que se han introducido y que han impactado en un incremento sostenido de las personas en privación de libertad.

Hay también un trabajo de la policía que es bueno y efectivo en lo que tiene que ver con la resolución de los casos e identificación de los responsables. Después, con la legislación existente, el sistema judicial determina el tipo de pena para esa persona.

Entonces, yo identificaría esto como un tema en sí mismo, para poder ser evaluado en profundidad, a raíz también de los aprendizajes que hemos tenido en estos años, sobre todo en algunas poblaciones específicas, como por ejemplo las mujeres en privación de libertad, y el impacto que ha ocasionado en ello algún artículo, en especial de la LUC.

A propósito de cuestiones legales, quiero decir que antes de comenzar hablábamos con Fabián Rosano, porque hay algunas cuestiones que están algo entreveradas entre la Dinali y la Dinasla y creo que legalmente sería muy bueno revisarlo, determinar alcances, tareas y acciones, más allá de que nos consta que

tenemos voluntad de trabajar en conjunto y de que hay una discusión de fondo allí. No me quiero ir mucho del tema, pero ya que estoy, quiero mencionarlo. Por mandato, en la Dinali atendemos solamente a aquellos que tuvieron como pena la privación de libertad, pero no a quienes recibieron como pena una medida alternativa. De hecho, cuando la Dinali pasa a la órbita del Mides, la directora nacional de Protección Social, Fernanda Auersperg, me encomienda ir a trabajar a la Dinali, y esta fue una de las primeras cosas que los funcionarios nos transmitieron. Tampoco atendemos a quienes salen del Inisa. ¿Por qué? Bueno, porque legalmente, desde su constitución se trabaja con quienes provienen del INR. Si vienen quienes salen del Inisa les decimos que tienen que pasar por el INR para intentar atenderlos. Entonces, hay algunas cuestiones que, si bien no tienen que ver con la pregunta madre, ya que estaba quiero decirlo porque se vincula con lo legal, que era lo que mencionaba hace un momento.

Por otro lado, en cuanto a la experiencia que estamos teniendo en el Mides con relación a la protección social, el cambio del paradigma de atención a las personas en situación de calle, creo que el año pasado hubo algo que fue importante más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo. Me refiero al llamado a instituciones para la presentación de proyectos de innovación social, como se los llamó. Es una experiencia que apunta a cambiar el eje: en lugar de que el Estado le diga a la sociedad civil qué hacer, la idea es escucharla para ver qué nos propone realizar sobre la base de las situaciones que atendemos. El foco está puesto en personas en situación de calle. Se presentaron y quedaron seleccionados algunos proyectos que tienen como público objetivo a personas liberadas del sistema penitenciario. Funcionan en diversas modalidades, pero el eje está puesto en centros de la modalidad 24 horas, en los que se busca dar una atención integral a la persona, reconstruir vínculos con su familia, proporcionar los elementos básicos para que vuelva a adquirir hábitos perdidos, contactarla con el mundo laboral para que ingrese nuevamente a trabajar y acompañarla



en ese proceso. Todo eso se haría en forma paralela y acompañados de otras instituciones, como por ejemplo la Dinali. Creo que este modelo está arrojando buenos resultados. Invito a visitar cualquiera de los tres centros; me baso en lo que veo, en lo que escucho y en las historias de las personas que han estado allí.

A su vez, para determinado tipo de delitos, sobre todo cuando estamos pensando en primarios y el móvil del delito es un tema de adicción, entiendo que estos modelos pueden ser alternativos a la privación de libertad. Me parece que podrían llegar a funcionar para determinado tipo de población, sobre todo para jóvenes, que son primarios en su mayoría. Obviamente, gran parte de lo legal lo desconozco, de cómo se puede instrumentar y demás, pero me parece que el sistema estilo chacra para esta población puede ser efectivo y de hecho lo está siendo.

La tercera pregunta refería a pensar un poco en el egreso. Para no acaparar con esos dos puntos, en primer lugar hablaría de una revisión legal a la hora de ver si hay que ajustar la normativa vigente y que eso implique cambios de pena en vez de prisión. Como segundo punto trataría, en la medida de lo posible –ni siquiera lo menciono porque creo que lo vamos a compartir–, la creación de más plazas. Entendemos que es necesario, pero yendo a otro modelo, buscando otra alternativa, algo diferente, me parece que este sistema, que hoy en día está funcionando para liberados, puede ser una herramienta a evaluar para determinado tipo de delitos.

**SEÑORA CAGGIANO.-** Esta es la primera vez que me sumo, ya que la vez pasada vino otro compañero representando a la directiva de Anong.

Este foco temático no es un grupo de trabajo específico dentro de la asociación y estamos en pleno proceso de armar un espacio que pueda aportar algunas reflexiones más colectivas, más institucionales y organizadas en esta mesa de conversación. Particularmente se está organizando ese espacio, pero, de alguna forma, ya hemos mantenido algunos intercambios y me encomendaron la tarea de venir y representar a

esta institución que integro desde más de doce años, tiempo durante el cual analizamos diversos temas, específicamente, la realidad de las mujeres privadas de libertad. Con respecto a estos temas, precisamos algunos días como para hacer aportes más colectivos. Simplemente me interesaba puntualizarlo.

Entiendo perfectamente el orden en el que han planteado estas preguntas. Los tres ejes temáticos son bien importantes, pero de alguna forma sería bueno pensar qué política criminal estamos teniendo desde hace más de diez años. Su efectividad de alguna forma nos lleva a hablar de un sistema que está en crisis hace décadas, tal como plantean los distintos documentos. Obviamente, no podemos alejar este tema de la discusión de seguridad que de alguna forma remite a las condiciones y a las políticas de desarrollo social que hemos venido atravesando en las últimas décadas. Hablamos de problemas mucho más complejos y que no se resuelven o que la cárcel no debería ser el espacio para solucionarlos, ya que por lo general funciona como un agravante a situaciones que ya, en el punto de partida, son bastante difíciles. Entonces, pensando en el documento estratégico –sin querer romperles la dinámica–, en esa línea, no vamos a hablar del estado de situación porque creo que sobran documentos y reflexiones de espacios institucionales que nos hemos dado como sociedad uruguaya en la conformación del Estado y del espacio público. Tenemos los informes anuales del comisionado parlamentario, los informes temáticos y los informes por unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que año a año señalan cuáles son las deficiencias y dificultades estructurales que tiene el sistema, cómo se sostienen y cómo de alguna forma en el sistema político –ya sea quien ocupe el espacio en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que controla el funcionamiento de las políticas públicas y aprueba normativas en relación con estos temas– hay como una no asunción de responsabilidades claras respecto a los efectos o a los resultados que todo el sistema de políticas públicas viene arrojando en relación con este tema.

Creo que estamos en un estado de situación en el que venimos en una política de parches. Buenas iniciativas y compromiso real de quienes sostienen estas instituciones sobran, y todos quienes están acá, en la mesa, son los que cotidianamente batallan con todas las dificultades que tiene el sistema, con todas las cosas que les gustaría hacer y no suceden.

Entonces, en esto de pensar un documento estratégico que sea de propuesta en este espacio de discusión política que se abre este año con la campaña electoral, como aporte a quienes sean candidatos presidenciales, creo que la discusión debería de empezar por preguntarnos qué tipo de institucionalidad y de política deberíamos tener en relación con el abordaje de estos temas.

Obviamente, como eje uno, debemos hablar de superpoblación y de hacinamiento, y también de la intervención penitenciaria efectiva. Se trata de dos ejes temáticos que llaman la atención pues, de alguna forma, son las preocupaciones emergentes que aparecen cuando se habla de estos temas, pero en el fondo está la cuestión de qué diseño institucional y de política con relación al abordaje de la seguridad estamos teniendo.

No quiero romper la dinámica, pero me parece importante partir de ahí porque son problemas estructurales que, junto a otros, o sea, el hacinamiento y la superpoblación penitenciaria, se traducen en problemas de acceso a la alimentación, a alimentación de calidad y continua en unidades que están sumamente abarrotadas de personas y donde, además, la proporción de funcionarios para atender la situación y la dinámica de vida cotidiana de las personas es altamente insuficiente para el tránsito que se da dentro de las unidades. Ni hablemos de la disponibilidad de recursos, tanto sanitarios como de medicamentos, para una atención adecuada a la salud. Ahora estamos hablando de la comida, de que pueda llegar a todas las celdas, a todos los pisos, pero sin meternos en el asunto de la calidad.

Entonces, indudablemente, es importante el gancho de hablar de superpoblación y hacinamiento, pero se traduce después en todo esto. El asunto es que tenemos un marco legislativo que, lejos de contribuir a que este hacinamiento no sea la realidad constante, lo ha incrementado. Particularmente en el caso de las mujeres, vaya que el artículo 74, como reseñan las compañeras de Familias Presentes, ha agravado esa situación y esa es la realidad con la que nosotras trabajamos en la Unidad n.º 5.

Eso como primera impresión.

**SEÑOR ROSANO.-** Buenas tardes.

Soy Fabián Rosano, director de Medias Alternativas, por el INR.

En realidad, al igual que Valeria Caggiano, me estoy sumando por primera vez y, obviamente, también me toca expresarme, no a título personal sino en representación del Instituto Nacional de Rehabilitación, tal como lo harán los dos compañeros que van a proseguir.

Desde el INR, obviamente, observamos los fenómenos a los que se hace referencia en los documentos y que tienen que ver con el crecimiento de la población penitenciaria, sobre todo en los últimos tiempos, si bien es algo que no ha dejado de ser una constante en nuestro país. Como gestores no nos corresponde entrar en ese tema, más allá de que, efectivamente, constituye una preocupación, tal como se ha expresado hace unos días en este recinto y en las comisiones de seguimiento. Hablamos de la preocupación por las condiciones de hacinamiento y estructurales que hoy tiene la infraestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación. A nivel penitenciario existe una regla básica. Tengamos 2000, 15.000, 20.000 –los que sean–, hay un punto básico que consiste en las condiciones dignas de alojamiento. En un sistema penitenciario podemos tener dudas o no y estar de acuerdo o no sobre si es la solución, pero eso está y responde a la legislación vigente. Hay algo que es muy claro: si no se puede dormir en un lugar en condiciones, si no se puede comer comida en condiciones, si no hay atención de

salud y demás, obviamente el sistema no va a responder, porque todo lo que se intente hacer después, va a ser difícil de conseguir. En ese sentido, el instituto –tal como se ha expresado– viene haciendo grandes esfuerzos, particularmente con el Ministerio del Interior, pero también con mano de obra de privados de libertad, tratando de trabajar en el tema de las plazas. Como decía, vamos a la zaga del crecimiento penal y debemos dar una respuesta. No podemos decir que no entra nadie más porque no tenemos lugar, ya que el sistema no funciona de esa manera.

Tal como hemos presentado –y quizás la semana que viene podamos traer algunos otros documentos–, se ha hecho un gran esfuerzo por conseguir y generar plazas. Como se trata de construcciones, son medidas a mediano y largo plazo, no de respuesta inmediata. No se construye inmediatamente una unidad. Por lo tanto, terminamos hablando de determinada fecha en la que decimos que vamos a llegar y que va a haber plazas para ciertas cuestiones, pero lo cierto es que queremos saber cuál va a ser la proyección para esos días cuando lleguemos al número que tenemos hoy.

Lo que podemos asegurar es que existe un reconocimiento de las condiciones. Tanto el señor ministro como nuestro director nacional, en varias oportunidades han expresado que en este punto los esfuerzos están enfocados desde ese lugar. A título personal, creo que justamente las organizaciones externas serán las que podrán tallar sobre esa puerta de entrada. El tema es que nosotros empezamos a desarrollar nuestra función en la puerta de entrada. Respecto a todo el fenómeno del inflamamiento legal, la dosimetría penal y el agravamiento o no de algunos delitos, existen instituciones que están representadas en esta mesa –por eso la importancia de estas instancias de diálogo– que serán las que van a poder desarrollarlo con mayor libertad y expresar su preocupación, sobre todo por la legitimidad de su representación.

**SEÑORA SALINAS.-** Mi nombre es Lourdes Salinas y soy subdirectora nacional técnica del INR.

Tal vez corresponda hacer una pregunta macro que tiene que ver con qué política criminal quiere Uruguay: si desea continuar con una más vinculada a lo punitivo o una que visualice las problemáticas de la población en general, en sus diferentes niveles y características, y que sea realmente integral. Es una pregunta que la largo al universo, como se dice comúnmente.

Como bien señaló Fabián Rosano, nuestras competencias comienzan del portón para adentro –así lo decimos siempre– y finalizan del portón para afuera. Recibimos una población más que vulnerable –desconozco si existe otra palabra para algo que va más allá de la vulneración–, que se ha incrementado permanentemente, y siempre vamos como atrás de las situaciones. Una vez que resolvemos algo, enseguida surge otro problema; lo resolvemos y surge otro problema; resolvemos ese y surge otro más. Eso no nos da mucho espacio para poder planificar, sentarnos y proyectarnos al año que viene, a cinco años, diez años, veinte años adelante en relación con la privación de libertad. Es así como vemos con muy buenos ojos el inicio del diseño de una estrategia de reforma penitenciaria en la que entendemos que tenemos que participar todos, lo que va a ser así o, por lo menos, de esa forma es como está establecido: no solamente van a estar el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, sino que también se va a involucrar a las organizaciones civiles y a las instituciones que trabajan en el día a día con nosotros. Eso va a ser muy bueno.

¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos más de 15.700 personas privadas de libertad con múltiples problemáticas que debemos atender y es nuestra principal prioridad.

Como bien decía Fabián Rosano, el ministerio prevé la construcción de una nueva cárcel para mujeres y tres unidades penitenciarias más que van a estar ubicadas en un terreno contiguo a lo que hoy es la Unidad n.º 3, es decir, el expenal de Libertad. Entendemos que esa tampoco es la solución definitiva. Para poder responder las preguntas en relación con la superpoblación y el hacinamiento se tienen que dar varias

acciones al mismo tiempo. Si seguimos construyendo cárceles penitenciarias y no hay un cambio en la legislación de ejecución penal ni un fortalecimiento de las medidas alternativas, vamos a seguir construyendo sin que en otros ámbitos haya cambios que deben darse para tratar de llegar como a una meseta en el sistema de ejecución penal. Por eso entiendo que tiene que ser algo integral y unido; no es una cosa y después la otra, sino que en un mundo ideal se tendrían que dar prácticamente al mismo tiempo distintos cambios en diferentes ámbitos: no solamente debe haber medidas alternativas, sino también políticas sociales para intervenir en tiempo y forma en la población antes de la privación de libertad y luego de ella.

Yo particularmente soy una férrea defensora del trabajo penitenciario, lo vivo en el día a día desde el 2011 como operadora penitenciaria y ahora en el cargo que tengo. Defiendo muchísimo todas las prácticas y las acciones que llevan adelante a diario, no solamente los funcionarios penitenciarios sino también muchas instituciones que hoy están presentes acá y otras que no están, que trabajan constantemente. Sé de la preocupación, la dedicación y el esfuerzo que ponen no solamente desde lo financiero – porque eso va y viene–, sino desde lo emocional y desde el cuerpo, porque así se trabaja en el sistema penitenciario. Creo que se están haciendo muchas cosas, muchas actividades, cada vez se incluye a más actores, empresas privadas, instituciones, organizaciones, pero entiendo que se tiene que ampliar mucho más ese alcance que hoy tenemos. Como he dicho, ingresan más privados de libertad, tenemos esas acciones; ingresan más privados de libertad, debemos tener más acciones para incluir a ese otro grupo que ingresa a las unidades penitenciarias.

Por eso, me parece importante destacar esto: las acciones que llevan adelante las instituciones y organizaciones deben ser valoradas, y se necesita su fortalecimiento y ampliación a todo el sistema penitenciario. Para eso, volvemos al tema del presupuesto,

al del ingreso de funcionarios, técnicos, policías, operadores, médicos, enfermeros, más oenegés y todo lo que pueda integrarse a la dinámica del sistema penitenciario.

**SEÑOR RECALDE.-** Mi nombre es Wilfredo Recalde; soy subdirector de SAI-PPL y quería hacer unos aportes.

Haciendo más las palabras de quienes han intervenido hasta ahora, me parece que no hay una especialización para cárceles en el país, más que nada en la parte médica, como lo había dicho anteriormente. Apostamos a la academia para que en el día de mañana sí exista; esa es nuestra intención.

Las personas que estamos acá, más o menos somos los más entendidos y nos acercamos a una experticia en el funcionamiento de cárceles, sobre todo porque las entendemos desde adentro, porque andamos caminando por sus pasillos. Siempre estamos en comunicación con las autoridades con el objetivo de ver cuáles podrían ser nuestros aportes para la mejora.

Creo que lo que más se destaca es la buena comunicación que existe entre los diferentes actores. La vez pasada decía que la gran mayoría de nosotros nos conocemos las caras porque hemos estado reunidos y hemos tenido instancias de diálogo con lluvia de ideas para ver cómo podemos hacer. Siempre recalco y destaco de la gente que está presente acá, sobre todo, las intenciones que tiene y los aportes que brinda para que en nuestro país el sistema sea más funcional. Me parece que eso depende mucho del compromiso de las personas.

Las personas que trabajan acá –como decía Lourdes Salinas– ponen mucho cuerpo, mucho de su pienso también, como, por ejemplo, de la nada hacer una llamada y decir qué te parece si proponemos estas ideas.

Basta con ver la opinión pública para saber que en el país nadie entiende nada de cárcel si no está dentro del sistema. Entonces, también abogo entre nosotros, los que estamos acá, por apostar a ese buen diálogo, que nos cuidemos entre nosotros, que



preguntemos primero entre nosotros qué es lo que estamos haciendo para después poder transmitírselo a la población. Creo que también es de nuestra responsabilidad ser buenos comunicadores con la gente y evitar que la población siga generando cosas que uno lee en las redes, que generalmente apuntan al odio y a la discriminación de nuestros pacientes, de quienes tenemos que cuidar.

Me parecen importantísimos los dos detalles de los que se habló, que son muy grandes. La gente que está es porque elige. Creo que todos los que estamos acá elegimos trabajar en el sistema penitenciario; si no, ya nos habríamos ido, pero somos los que estamos, le damos continuidad y crecemos dentro del sistema con total libertad de hacer aportes.

Entonces, la invitación es a que nosotros, siendo la gente que participa, está y apuesta, sepamos transmitir la información a la población, primero para que se vea que las poblaciones que nosotros asistimos son personas vulnerables, aunque me gusta más usar el concepto de «vulneradas» porque somos el Estado y como tal tenemos que velar por que sus derechos sean cumplidos, cuidados y defendidos por nosotros, que somos las instituciones.

Este es mi aporte.

Voy a hablar de nuevo después, pero no quería dejar pasar esto.

Gracias por los aportes.

**SEÑOR PETIT.-** Aprovechando los comentarios de Fabián Rosano y de Lourdes Salinas quiero decir, aunque fuera sin rigor estadístico, que claramente el mundo de las medidas alternativas es uno en el cual todos tenemos cifrada una cantidad de esperanzas. Quizá sea la válvula más nítida que imaginamos –después, en la realidad, veremos si es o no– para ajustar la cantidad de personas privadas de libertad, que todo indica que es imposible sostener.

Hoy habría que construir siete cárceles para quinientas personas. Si tuviéramos una varita mágica y lográramos hacerlo, creo que el país no tiene los técnicos, los operadores, los médicos, los asistentes sociales ni los policías para poder ocupar esos lugares. Entonces, por ahí no va. Bienvenidos los centros nuevos que se hagan, bienvenidos los nuevos módulos del expenal de Libertad y, tal vez, algún día podamos celebrar en una gran fiesta cívica el cierre del celdario n.º 1.

De acuerdo con los números que ustedes tienen con respecto al Oasys y a la escala de riesgo, pregunto qué impresión tienen con respecto al número de personas que podría ameritar una medida alternativa a la prisión. No pido un número exacto, sino solo un estimado.

Otra pregunta que formulo es si hay un estimado de la cantidad de gente que podría tener una prisión mixta, como tengo entendido que ya hay. Sé que también existe una tercera posibilidad, que es la de aquellas personas que podrían ir evolucionando en su situación penitenciaria y estarían en condiciones de postularse para una medida alternativa, de modo que no tuvieran que cumplir la totalidad de la pena en virtud de que llevarían dos o tres años trabajando con un proyecto de vida. Obviamente, esto requiere otro tipo de elementos ya que, si modificamos la ley pero no el hecho de que efectivamente haya equipos técnicos y un lugar donde puedan demostrar su progreso, esa alternativa se vuelve difícil de aplicar.

**SEÑOR ROSANO.-** Obviamente, no voy a referirme al Oasys porque no es un tema que yo maneje. No obstante, haciendo un sondeo de tipo jurídico, encontramos que con relación a las distintas gradualidades de medidas alternativas –muchas veces cuando se habla de ese tipo de medidas solo se piensa en el arresto con prisión domiciliaria, olvidando que gran parte de ellas son la libertad a prueba que lo único que implican son obligaciones– había un porcentaje alto, calculado en alrededor de 1500 personas que, con alguna modificación normativa –hoy las normas no permiten tal solución– podrían

acceder a ellas. Eso, por ejemplo, nos pasó con la modificación de actos preparatorios del tema de las mujeres, con relación al cambio que se sugirió para la nueva ley de presupuesto. En ese sentido, calculamos que unas 150 mujeres podrían acceder a medidas alternativas.

Esos son los números que pudimos obtener jugando un poco con el sistema de gestión carcelaria y considerándolo desde ese lugar. Sin duda, debo aclarar que hay una diferencia entre Fabián Rosano persona y Fabián Rosano director nacional. El día que me tocó asumir la Dirección Nacional de Medidas Alternativas tenía claro que creía en ellas, porque de lo contrario no habría aceptado realizar esa tarea. Si hay algo que me distingue es que soy un orgulloso penitenciario. Me encanta decir que soy penitenciario y creo en ello, porque también me enseña que no siempre la cárcel es la solución. Ser penitenciario no se trata solo de pensar en la reja, sino que existen otras estrategias y que el eje del sistema penal no puede ser la cárcel. Por eso no me gusta hablar del sistema penitenciario y sí de la ejecución penal, ya que a mi juicio eso es menos estigmatizante, además de sacar del centro de toda sanción penal a la cárcel.

Por otra parte, sí me parece importante decir –en la misma línea de lo que expresaba Lourdes Salinas– que, cuando se llega a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y se encuentra con las herramientas con que se cuenta para trabajar, queda claro que, para hacer la verdadera tarea de medida alternativa como tal de modo que no se convierta en una cuestión administrativa, es preciso evitar que sea visualizada como impunidad o como un disfraz para no mandar a alguien preso, que es lo que más molesta cuando se habla de este tema.

Una medida alternativa no es muy distinta de la privación de libertad en algunos puntos, primero, porque la hay cuando hablamos de arrestos y prisiones. Insisto siempre con eso y a los que veo seguido les pido perdón por ser reiterativo, porque ya me han escuchado decirlo, pero cuando hablo de privación de libertad –y siempre pongo el

ejemplo de la pandemia– no es solamente con referencia a la cárcel. Por ejemplo, la situación de una mujer que no puede maternar, que no puede llevar a sus hijos a la escuela, o la de un varón que tampoco logra ser parte de la vida familiar, la de quienes no pueden ir al médico, es decir, que necesitan una custodia para hacerlo, o algo por el estilo, también es privación de libertad aunque sea en la casa. Los problemas mentales, las consecuencias económicas, las va a tener en el sistema penitenciario, pero también en el afuera y es importante resaltarlo. Si no hay recursos, si no hay programas adonde derivar adictos, si no hay formas de lograr determinados apoyos económicos con el Ministerio de Desarrollo Social, la medida alternativa termina siendo muy dañina. Si no tengo técnicos que acompañen ese proceso de manera que podamos intervenir y trabajar el delito, se trata de encierro y nada más. Entonces, esa medida alternativa no es tal, porque se desnaturaliza por sí misma.

Creo que de la misma manera que debemos pensar en qué política criminal queremos tener, no puede haber una medida alternativa que solo sea conceptual. Tiene que venir acompañada de un apoyo –no quiero adelantarme a la próxima pregunta– de la sociedad civil, de un acompañamiento de la sociedad civil organizada y de un apoyo interinstitucional en una comunicación directa. En una oportunidad señalé –a veces me caracterizo por no ser muy políticamente correcto–, en plena reunión de la Junta Nacional de Drogas, que en este año y medio que llevo de director –y de creada la dirección– no logré nunca derivar a una persona a un centro de adicción. ¿Cómo lo logré? Con la colaboración del Mides, es decir, con las contrataciones que ellos hacen, y casi por un favor, porque ni siquiera hay un trámite administrativo que permita hacerlo. Entonces, cuando nuestros técnicos han dictaminado que la persona no está en condiciones de cumplir la medida alternativa y que urgentemente necesita un tratamiento para adicciones, nunca logré que el Portal Amarillo me abriera la puerta. No lo logré, no pude y me he comunicado a todo nivel. Entonces, esa comunicación

tampoco sirve. Hay 410 convenios, lo que supone 410 instituciones que van a colaborar, pero en la práctica se puede derivar solo a diez.

A eso me refiero cuando hablamos de medidas alternativas. Por sí misma, sin un verdadero fundamento, sin un acompañamiento, sin una atención integral, sin una mirada socioeducativa, sociodemográfica, de ambiente, etcétera, tampoco va a tener su efecto porque, finalmente –parafraseando a Lourdes Salinas–, no queremos ir por una política de castigo y que lo nuestro sea una formalidad, pasar una vez a la semana para saber si la persona se fue, sino que realmente ayude al individuo a formar parte, que tenga un rol restaurativo –como es el fin– y que trabaje sobre el delito. Eso, hoy, no estamos en condiciones de cumplirlo.

**SEÑORA SALINAS.-** Voy a tratar de resumir lo máximo posible.

Es una excelente pregunta la que se ha hecho, pero no puedo contestarla.

Fabián Rosano respondió desde el punto de vista jurídico porque, justamente, tenemos un sistema de gestión carcelaria que está en funcionamiento desde 2017 y en 2018 se sube una determinada cantidad de información, principalmente lo que tiene que ver con el aspecto jurídico de la persona, nacionalidad e identidad, entre otros datos. El Oasys, particularmente, es un instrumento que se viene desarrollando desde 2017 o 2018, pero no tenemos una sistematización. Sí podemos decir que ese instrumento se va a empezar a incorporar al Sistema de Gestión Carcelaria. Eso nos va a brindar información que, una vez sistematizada, podremos utilizar para observar indicadores o variables que nos permitan tomar otras decisiones. Igualmente, me queda la duda –no sé si la pregunta va por ahí– de si, una vez que tengamos esos datos, el Instituto Nacional de Rehabilitación podrá visualizar personas que estén con privación de libertad y, según entendemos, en condiciones de tener una medida alternativa. No sé si eso es posible desde el punto de vista legal. Tal vez con un informe de los técnicos del Instituto

Nacional de Rehabilitación al juez de ejecución, se podría ver si es viable que, desde el punto de vista normativo, lo considere para tomar la decisión.

**SEÑOR ROSANO.-** Hay un aspecto que quería mencionar más adelante, pero viene al caso hacerlo en este momento. Me refiero a que, legalmente, tampoco tenemos esa puerta de entrada. No se trata solo de un tema de voluntad.

Ayer comentaba a algunos compañeros que estuvimos en una reunión en la que se dijo que, para el caso de las tareas comunitarias, cuando hay obligaciones la ley exige que hagamos un programa individualizado de intervención, pero no para los arrestos y prisiones domiciliarias. Nos ha pasado en algún caso enviar un informe a un juez porque pretendemos suavizar algunas medidas. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer que hace dos años que no tiene ningún incumplimiento y ha tenido que escolarizar a su hijo. Disculpen que siempre menciono los mismos casos, pero son paradigmáticos. Nos preguntamos por qué no se nos autoriza a reducir la medida de control a esa persona – por ejemplo, la tobillera que está automatizada– y que empiecen a controlarla después de las seis de la tarde y hasta las nueve de la mañana, hora en que el niño concurre al CAIF. Los jueces dicen: «Me encantaría, pero no hay un mecanismo legal que permita que tú me comuniques eso. No puedo sumar eso al expediente. No existe una solicitud que me permita hacer eso». Yo solamente informo cumplimientos o incumplimientos. Cuando comunico que una persona no está en condiciones de cumplir la medida, lo que hacen es suspenderla y dilatarla. Esa es la resolución que viene judicialmente.

De modo que ahí también se requeriría una voluntad política legislativa a fin de modificar algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas alternativas que no permiten al INR ni a nuestros técnicos comunicarse con esas autoridades para hacer una solicitud o generarla. A veces, lo hacemos por medio de la defensoría, etcétera, pero como institución no tenemos puerta de entrada o válvula de escape para ingresar ahí.

**SEÑORA PODESTÁ.-** ¿Las comunicaciones con los jueces competentes han sido verbales o tienen documentación al respecto?

**SEÑOR ROSANO.-** Siempre han sido comunicaciones verbales, tanto con los jueces como con la Fiscalía, porque siempre fueron sobre casos concretos. Lo he expresado continuamente porque creo que es una modificación e, incluso, nos pasa hasta con los incumplimientos.

Puedo citar otro caso paradigmático. Una persona cruzó a mitad de cuadra para ir a una policlínica porque se sentía mal. Se la llamó a audiencia y querían revocar, pero en el informe nosotros habíamos puesto, en todos lados, que habíamos visto que todo el tiempo había estado –enviamos las trazas– en la policlínica. Tuve una discusión muy fuerte –casi acabo declarando también porque me pongo muy nervioso– porque yo insistía en que la persona estaba en la policlínica y podía probarlo. La tobillera lo estaba diciendo, yo tenía las trazas y podía enviarles la información. La persona cruzó a la policlínica porque se sentía mal y nunca se movió de ahí hasta que volvió a su casa. Sin embargo, esa persona fue reintegrada a la cárcel por incumplimiento.

**SEÑOR CAMARGO.-** Buenas tardes. Soy el comisario Jorge Camargo del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Voy a ser muy breve porque todos los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra ya han mencionado –y estamos de acuerdo– que la situación de hacinamiento del sistema es preocupante y ha alcanzado unos números de los que oportunamente fuimos alertados por la Oficina Comisionado Parlamentario, cuando comenzaba, alrededor del 2020. Por lo tanto, no deberían tomarnos por sorpresa los números de privados de libertad que tenemos hoy en día.

Acerca de las medidas que se consideran prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario, me parece que la respuesta no está en el sistema carcelario y nunca será construir nuevas cárceles. Digo esto por la sencilla razón de que nunca van a

ser suficientes las cárceles que hagamos si la forma de proceder sigue siendo altamente punitivista. El tema es que este es un año complicado para que el discurso vaya en otro sentido; es difícil que escuchemos alguno que no vaya de la mano de aumentar penas y encarcelar a más gente. El panorama no es muy favorable.

Como decía, en mi opinión, la solución está antes del sistema penitenciario y carcelario, en una etapa presentencial en la que se esté formalizando la investigación o, incluso, antes de que un juez –con todas las garantías del debido proceso– dicte una sentencia. Deberíamos utilizar o fortalecer algún área –que seguramente no será el ITF, aunque también debería ser fortalecido porque los reclamos de los colegas son cada vez más fuertes y más claros– y crear algún mecanismo de evaluación psicosocial de la persona antes de disponer la privación de libertad para ver si puede adherir a alguna medida alternativa a la prisión efectiva. Me parece que el número de personas derivadas al sistema de medidas alternativas aumentaría si hubiese una especie de estudio de cada caso. El otro día, en la Junta Nacional de Drogas, en una jornada organizada por Copolad, el doctor Rodrigo Morosoli explicaba de manera muy ilustrativa la urgencia con la que tiene que encarar muchas situaciones –seguramente todos los fiscales están en la misma situación– y contaba que muchas veces las 48 horas no les permiten mucho más estudio de los casos que el que realizan. Entonces, me parece que hay que fortalecer las defensorías de oficio, crear un mecanismo de abordaje o estudio del caso a caso antes de que se dicte la sentencia y ver si la persona puede adherir o cumplir su condena en un medio abierto. Esa es la alternativa que veo hoy en día para combatir el hacinamiento porque, según el señor Sosa, se necesitan 3000 plazas. Probablemente, con la construcción de las que están proyectadas se llegue a ese número, que es el que se necesita hoy, pero el año que viene se van a precisar 4000.

Acerca del papel de las medidas a instrumentar, obviamente, ya fue expuesto anteriormente por el señor Fabián Rosano y la señora Lourdes Salinas. Entonces, estaría



redundando en la necesidad de fortalecer una unidad o una dirección que entiendo que, de manera paulatina, debería ir transformándose en una dirección nacional, con recursos y presupuesto propios y con un alcance verdaderamente nacional. Creo que el señor Rosano no lo mencionó, pero se necesita mucha colaboración de las jefaturas policiales que están abocadas al orden público y poco les interesan –lo entendemos– las medidas alternativas. Como están dentro del Ministerio del Interior colaboran con una suerte de favores, yendo a controlar o concurriendo ante una desconexión o ciertas incidencias que tienen lugar en algunos dispositivos. Me parece que esa es una segunda medida porque si queremos fomentar la aplicación de medidas alternativas debemos aumentar el alcance de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.

En cuanto a los mecanismos de egreso, me parece que en los últimos años hemos mejorado mucho. Entre 2019 y 2021 estuve en el ex-Comcar y hasta 2021 a los privados de libertad se les daba un boleto para el 127, no para el 494. O sea que, si el privado de libertad iba para el Buceo, no tenía ómnibus. Esa es la atención que se venía dando para el momento del egreso del privado de libertad que estaba recuperando su libertad. La persona estaba tres, cuatro, cinco meses o años siendo atendida, en cierta medida, por el sistema, con atención en salud, probablemente con educación, con algo de trabajo y al otro día de ser liberado no tenía nada.

Nosotros venimos de Chile. Fuimos allí en el mes de setiembre; también nos acompañó el comisionado. En realidad, no soy tan fan de copiar todas las experiencias extranjeras –hay que analizarlas para saber si podrían funcionar aquí o no–, pero vi un sistema pospenitenciario –es algo de lo que nosotros no hablamos aquí, en el Uruguay– que es muy fuerte y robusto y tiene alguna suerte de premios. Obviamente, son posibilidades legales del derecho de Chile que permiten, por ejemplo, la eliminación de antecedentes de las personas que adhieran a un tratamiento pospenitenciario con una

especie de casas, refugios, posadas de medio camino, posadas del liberado, por decirlo de alguna forma, aunque ellos utilizan otra denominación.

Durante dos años, luego de salir en libertad, la persona queda ligada al sistema pospenitenciario buscando, por ejemplo, la eliminación de los antecedentes. Con eso logran una reducción importante de la reincidencia y del reingreso. Además, acompañan a la persona en esos dos años tan complicados y delicados en libertad, realizando una especie de tutela del liberado hasta tanto pueda reintegrarse o integrarse a un trabajo, una institución educativa, una contención familiar o un afecto.

Personalmente, trataría de fortalecer los mecanismos de egreso, fortalecer la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Me parece que fue una excelente medida –lo digo humildemente– el pasaje al Mides porque permite a la Dinali contar con sus dispositivos territoriales. Ese diálogo, esa articulación se hace dentro del mismo ministerio y no existen las trabas burocráticas que caracterizan a la Administración en general.

Me parece que hay dos direcciones que en un futuro deberían ser consideradas para el sistema: la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. En realidad, con eso el sistema penitenciario se vería beneficiado, pero carecemos de recursos. Es cierto que han ingresado funcionarios, pero siempre van a faltar en la medida en que sigue ingresando gente privada de libertad. Es algo inabarcable. Entonces, respondiendo al primer punto, referente a la superpoblación y el hacinamiento, eso es cuanto tengo para decir.

**SEÑORA LACUESTA.-** Qué suerte que Wilfredo Recalde habló primero; me encanta que sea tan romántico con sus palabras. Comparto totalmente lo expresado por él.

A mí me toca hablar acá del área de la salud. No me puedo quitar mi investidura de enfermera y gestora en este momento. Comparto todo lo que se viene tratando en cuanto a medidas alternativas, etcétera. No soy idónea en ese sentido. Por lo tanto,

vengo a hablarles acá con Wilfredo Recalde de situaciones específicas de hacinamiento y cómo impactan directamente en nuestra unidad ejecutora.

Identificamos dos unidades como las de mayor hacinamiento –creo que en eso estamos todos de acuerdo–: la Unidad n.º 4 Santiago Vázquez, y la Unidad n.º 5 Femenino. Particularmente, en la Unidad n.º 4 destacamos los módulos 11, 10, 4 y 3. Por los datos que tuvimos –ustedes me dirán–, la Unidad n.º 4 tiene una capacidad para 3800 PPL, y en este momento hay casi 4900. Por lo tanto, tenemos un 129 % de hacinamiento. O sea que estamos hablando de 1100 PPL que están hacinadas.

¿Cómo impacta esto en la salud? Primero que nada está la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo, enfermedades de piel, como reña, la escabiosis. Esta enfermedad, a su vez, se sobreinfecta. ¿Cómo tratamos la escabiosis? Mediante un tratamiento farmacológico y medidas higiénicas.

En cuanto al tratamiento farmacológico, en los meses de marzo y abril administramos 2240 comprimidos de Ivermectina. Esto tiene un costo de \$ 191.658. A eso también le sumamos los frascos de Permetrina, que es una loción que se aplica como complemento del tratamiento, pero tuvimos que dejar de usarla porque contenía alcohol y no se la pudimos dar más a las PPL. Lo hacemos nosotros en forma individualizada. A esto le sumamos casi \$ 10.000 más en este período para realizar el tratamiento. Estamos hablando de \$ 200.000 por mes. ¡Discúlpame si sueno fría al hablar de números, pero quiero que eso se visualice!

Quiere decir que, con relación a la escabiosis, en el ex-Comcar se gastan \$ 200.000 por mes solo en medicación. ¿Qué nos falta? Lo más importante: la higiene. ¡No existe! ¿Por qué no? Justamente por lo que venimos diciendo: las condiciones no están dadas para que la persona lave su ropa, airee los colchones y tome las medidas de limpieza necesarias. Por lo tanto, los \$ 200.000 van a un agujero negro o a un saco y el tratamiento no tiene ningún éxito. ¿Me explico?

Seguimos invirtiendo en algo a lo que nosotros no le estamos dando solución y entendemos que seguimos aportando dinero en tratamientos que no tienen éxito. Entonces, ¿vamos a seguir aportando plata en algo que realmente no es lo que tenemos que atacar? Esta sería una primera pregunta.

En el CNR tenemos la misma problemática, aunque mucho menor porque por suerte ahí hemos aplicado muchas estrategias, como establecer policlínicas en los módulos y un montón de cosas para brindar educación. En el CNR estamos mejor, pero tenemos el problema de la pediculosis. Igual situación: hacinamiento. En este momento, tenemos 784 PPL para una capacidad de 396 plazas. Por lo tanto, hay un 198 % de hacinamiento.

Volvemos a la misma realidad: destinamos \$ 230.000 por mes a este tipo de tratamiento, pero sin éxito. Ustedes vayan sumando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir destinando plata a cosas que realmente no están llevando a nada o, de alguna manera, podemos redistribuir recursos mejorando las condiciones de esas PPL y plantearnos mejorar la situación?

Sé que no tenemos la fórmula mágica, pero, por ejemplo, si hacemos una distribución de módulos de salud específicamente para personas que nosotros detectemos que tienen determinadas patologías, podríamos paliar un poco la situación que hoy en día estamos viviendo. Como dice Lourdes Salinas, las plazas nuevas van a demorar, ¿pero qué hacemos hoy en día para disminuir eso? Por el hecho de que el hacinamiento existe no vamos a sacar a la gente de la cárcel, las enfermedades van a existir y lo que es peor, van a aumentar. Desde el 20 de marzo a la fecha empezamos a hacer pesquisas de tuberculosis. Al momento hay cinco personas con resultado positivo, más todos los que ya teníamos, que están identificados. Se realizan quince estudios semanales y se encontraron cinco positivos. ¡Es un montón! Reitero que estoy haciendo referencia al ex-Comcar.

Sé que a veces somos muy biologicistas y muy pesados con la salud, pero ahí es donde se ven claramente las debilidades del sistema: en el estado sanitario. Obviamente, un detalle es la alimentación. Es un sistema en el que no sabemos si se les da poca cantidad; eso lo desconocemos. Hay módulos donde eso se desconoce, pero impacta totalmente en los tratamientos.

Como siempre decimos: nosotros acompañamos al INR y este trata de acompañarnos a nosotros; hacemos lo que podemos, pero la situación nos pasa por arriba. Queríamos dejar eso sobre la mesa: lo económico, los números, lo que estamos gastando en comprimidos y tratamientos que no nos están dando resultado. La base de todo esto son, justamente, el hacinamiento y la superpoblación.

**SEÑOR RECALDE.-** Lo que describió la compañera ayuda mucho a visualizar los problemas de salud –en nuestro caso hablamos de salud– y es la matriz de los costos que tenemos como parte de nuestra gestión. En este caso, la matriz está conformada por gastos que, tal como dijimos, son principalmente paliativos, ya que la raíz del problema no está ahí. A nosotros nos gusta tecnificarnos y basarnos en la evidencia para hacer afirmaciones, y por eso los números son estos. Más allá de que se invierta a sabiendas de que no se puede dar solución por un tema habitacional, igual tenemos que hacer el tratamiento; no vamos a dejar de efectuarlo solamente por el hecho de que no podemos cumplir con las medidas higiénicas adecuadas.

A propósito de la tecnificación –algo de lo cual todos venimos hablando–, me parece que si comenzamos a analizar la situación desde la especialidad de la medicina penitenciaria y hacemos una búsqueda bibliográfica, seguramente vamos a encontrar recomendaciones para cárceles de todas partes del mundo. Si vemos lo que recomiendan Europa y los países latinoamericanos, basados en sus experiencias –tanto positivas como negativas, ya que tenemos el caso de El Salvador–, de todo eso se pueden sacar

elementos y crear una estrategia propia. No hay por qué inventar cosas puesto que en la bibliografía sobran, como dijeron los compañeros.

Desde el punto de vista de la salud, tenemos una problemática que es importante porque debemos hacernos responsables de muchas patologías, sobre todo en la esfera de la salud mental. Lamentablemente, hoy no está presente la gente del Poder Judicial, pero cabe aclarar que la herramienta del forense para nosotros es muy buena. Siempre tenemos algunos pacientes que, si tomamos en cuenta el diagnóstico médico, no deberían ser ingresados a una cárcel, sino a un hospital penitenciario o, mejor dicho, a un hospital psiquiátrico o que brinde otro tipo de cuidados que no sean los de una cárcel. Muchos de nuestros pacientes vienen con situaciones complejas, sobre todo de consumo, y tienen patologías duales, principalmente psiquiátricas.

Por lo tanto, el fortalecimiento del Instituto Técnico Forense para nosotros sería una muy buena herramienta, ya que se priorizarían la pericia psiquiátrica, la pericia médica y se sabría que hay muchos pacientes que están ingresando al sistema penitenciario, aunque realmente su destino no tendría que ser la cárcel sino otra institución para fortalecerlos desde otro lugar. Como de todas maneras entran a nuestro sistema, se da la circunstancia que mencionó Lourdes Salinas: cuando están del muro hacia dentro, nos hacemos cargo, pero también les hacemos informes a las otras instituciones para que ellas, tal vez, puedan rever una situación que fue producto de una toma de decisiones rápida –los tiempos así lo requieren– y quizás equivocada en ese momento.

En definitiva, fortalecer las pericias nos parece una herramienta muy buena desde la parte médica, sobre todo la revaloración de pacientes con patologías psiquiátricas. La pericia médico-psiquiátrica tendría que ser un fuerte más, sobre todo si visualizamos que la gran mayoría de nuestros privados de libertad tienen consumo y patologías psiquiátricas duales. Nosotros podemos pedir programas para cárceles, pero

creemos que el sistema penitenciario no debería hacerse cargo de patologías que no son las más apropiadas para la convivencia en cárceles.

Por otro lado, está el tema de las medidas alternativas; muchas veces hay problemas para hacer su seguimiento. Podrán tener las fallas que sea, pero ojalá fortalezcan el sistema porque, en realidad, nosotros también creemos en eso, sobre todo para los casos de pacientes añosos que ingresan al sistema. Muchos de ellos precisan un cuidador principal y el INR no está para eso, es decir, no tiene cuidadores principales para pacientes que, por ejemplo, están en silla de ruedas o necesitan que les cambien el pañal. Además, esas tampoco son cosas del quehacer de un enfermero, sino de un cuidador principal. En otros lugares lo hacen sus familiares o tienen la opción de ingresar al Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, deberíamos integrar ese sistema al nuestro y que nos otorgue personal para el cuidado de estos privados de libertad que necesitan un cuidador principal. De lo contrario, trataríamos de estudiar los casos puntuales en los que se precisan cuidadores, como por ejemplo, repito, pacientes que están en silla de ruedas, pacientes que necesitan que se les cambie el pañal, pacientes que son oxígeno-dependientes. A todos esos pacientes nosotros les hacemos tratamientos paliativos, pero muchas veces se le pide al INR que sus operadores se encarguen de velar por que tengan pañales. Nosotros se los podemos dar, pero no ir a cambiárselos. Muchas veces el paciente no tiene sus formas porque tuvo una hemiplejía o una patología restrictiva y para nosotros eso amerita la revaloración, donde un perito, un forense, nos pueda acompañar haciendo un diagnóstico que no sea meramente el de cuidado de la salud o el que realiza el INR con sus operadores. No va a solucionar el problema del hacinamiento. Lo que sí sabemos es que tenemos un montón de personas que reciben esos cuidados paliativos y que no correspondería.

Además, están las construcciones nuevas. Nosotros siempre preguntamos y como el Ministerio del Interior trabaja en conjunto con arquitectura de ASSE –con la

que nos reunimos, sobre todo para ver los centros de salud que van a funcionar en esas unidades nuevas— siempre recomendamos, si en las áreas de convivencia no vamos a cambiar esta estrategia y vemos que los pacientes que están en silla de ruedas y necesitan cuidadores principales van a ingresar al sistema sin ser reevaluados, que por lo menos tengan accesibilidad universal. Queremos que todas nuestras cárceles la tengan. Ya por el mero hecho de estar en una silla de ruedas tenemos que cargarlos a todos por los pisos. Reitero que si nos sentamos a hacer búsqueda bibliográfica de lo que existe a nivel mundial vamos a ver que las recomendaciones son que los edificios no sean de más de un piso, todos tendrían que ser planta baja, tendrían que ser pequeñas unidades insertadas en la comunidad. ¿Todo esto de dónde lo sacamos? Ya está escrito. Entonces, si no nos basamos en lo que ya está escrito para poder hacer cosas nuevas, creo que ahí ya fallamos. Estamos edificando o implementando estrategias que en otros lugares ya no funcionaron.

Asimismo, si nos volcamos a la realidad, como comentaba la licenciada, podemos hacer aproximaciones diagnósticas, aunque el número siempre fluctúa porque esa también es una problemática de salud. Podemos dar seguimiento a internos que continuamente están en movimiento porque sabemos que tienen problemas de convivencia, pero nuestra realidad a veces nos hace discontinuar los tratamientos. Lo que pasa es que en las matrices de costos de nuestras gestiones muchas veces los tratamientos significan un sobre costo, pero no solo respecto a la inversión sino en la resistencia. Nosotros empezamos tratamientos que a veces se discontinúan y ese medicamento que una vez fue efectivo después termina siendo poco resistente al germen que afectó. También estamos viendo situaciones reales donde la tuberculosis —como lo mencionó anteriormente la compañera— se está haciendo multirresistente y con fallas de tratamiento porque el medicamento que hasta ahora existe no puede matar el bicho. ¿Qué significa eso? Un riesgo para la comunidad y para el país entero porque no solo



hablamos de los privados de libertad. Ese germen es mucho más fuerte. Entonces, es mucho más complejo cuando lo visualizamos.

Queremos comentarles que estamos trabajando con el INR y con el ministerio para actualizar los diagnósticos de tuberculosis. Vamos a actualizarnos dejando de utilizar la muestra de expectoración para hacer una búsqueda activa del bacilo de Koch. Ahora vamos a utilizar lo que está bajo las recomendaciones mundiales, que es la aplicación de rayos X. Queremos que en el centro de ingreso a todos los pacientes –y también pensamos a las mujeres privadas de libertad– se les haga placas y luego realizar su lectura utilizando *software* y personal, como neumólogos. ¿Para qué? Pensando en esto, no solo en el gasto sino en el costo que le puede ocasionar a la salud pública que tengamos gérmenes multirresistentes. ¿Cómo se soluciona? Con las recomendaciones que ya están escritas, como decíamos anteriormente. Hablamos de habitaciones amplias, aireadas, que no sean húmedas, que tengan sol, que haya patio. Ahí es donde terminamos viendo que, en realidad, el sistema está tan complicado que falla lo que está indicado como parte de los tratamientos para poder solucionar los problemas de salud. Entonces, esas fallas de tratamiento van directamente de la mano del hacinamiento, porque todas estas enfermedades que nombró la compañera, que generan un sobregasto, son por contacto y cercanía, es porque están todos amontonados.

Reitero que es una pena que no esté presente el Poder Judicial, al que habían invitado, porque desde la salud vemos pertinente la revaloración de casos que, muchas veces, no estarían destinados a las cárceles, sino a otras instituciones.

**SEÑORA RODRÍGUEZ.-** Pertenezco a la asociación civil Familias Presentes.

Agradezco a la señora Lacuesta y al señor Recalde por estos planteos porque, sobre todo, me parece que nos permiten, como sociedad, darnos cuenta de que nos va la vida a todos, ya que este contagio de tuberculosis puede terminar afectando al más privilegiado de esta sociedad, porque adentro de las cárceles tenemos a la gente

podriéndose. Realmente, les agradezco y me parece –me meto en lo metodológico– que el informe tiene que incorporar algunas cuestiones de sensibilización, por lo que los testimonios y los datos de evidencia son bien importantes, escuetos, concretos, sencillos, van al hueso. Junto con eso quiero levantar también lo que decía Fabián Rosano con esto de los testimonios; ese o cualquier otro de esas características me parece que habla muchísimo de la situación.

Si me permiten, en forma totalmente modesta, sugiero que empiecen a escribir las solicitudes y a dejar evidencia, aunque no les respondan. La no respuesta es una evidencia de que no les están dando bolilla a informes técnicos de determinada situación. Esto aporta muchísimo a un proceso de repensar. El haber tenido que hablar a esta altura me obligó a hacer esas reflexiones.

Nosotros, como Familias Presentes, seguramente, vamos a hacer un aporte colectivo, nos vamos a tomar estas dos semanas que vienen, que no vamos a tener reuniones, para poder trabajar internamente y elaborar una respuesta preliminar a todas las preguntas porque, además, es como muy difícil ir respondiendo una a una. Si repartimos un poco la síntesis del informe del EPU que elaboramos, era porque también en las recomendaciones empezamos por cuestiones generales que tienen que ver con cuál es el sistema de ejecución penal que tenemos y el que queremos; qué INR queremos. Incluso, seguramente –por las cosas que hemos estado escuchando en todas estas oportunidades que hemos estado trabajando, pero también acá, me parece que estamos todos de acuerdo–, no sería para nada redundante resaltar que el de la rehabilitación seguiría siendo el paradigma desde el cual nos pararíamos o, al menos, nos estaríamos situando en uno nuevo del castigo y seguro; o sea, continuaríamos respaldándonos en el artículo 26 de la Constitución, aunque no se esté cumpliendo. Me parece que no sería para nada redundante que desde el predocumento empezáramos resaltando esas cuestiones. También coincido con algunas personas que hablaron antes,

con quienes hemos conversado –por eso en el documento del EPU lo planteamos así–, en que hay que empezar por pensar en esos grandes trazos, es decir, preguntándonos si este es un enfoque de derechos humanos, aceptando y respetando, que no lo hacemos, las Reglas de Mandela –que el país lo tiene mandado por ley, porque firmó el acuerdo internacional–, así como las Reglas de Bangkok. Pensamos que ese es como un paraguas con el que, si estamos de acuerdo en eso, podemos empezar a discutir las otras cosas. Ahí sí, empezando a ensayar una primera respuesta a las primeras preguntas, digo que abatir el hacinamiento empieza por pensar en que, si estamos parándonos en el paradigma de la rehabilitación, de la reeducación, entonces va de suyo que el castigo no es la solución y, por tanto, hay que revisar la legislación y el aumento de las penas que se ha venido dando durante décadas, porque esto no es de hace dos, tres ni siete años. Eso es lo primero que hay que revisar. No es una medida electoral –podemos estar de acuerdo–, pero es el momento de plantearlo. ¿Cuándo, si no? Porque acá tiene que haber mayorías de acuerdos para pensar en estas cuestiones.

Mientras no repensemos en el hecho de que la gente permanece más tiempo dentro de las cárceles, van a seguir hacinadas. Mientras no pensemos en medidas alternativas de verdad –estoy de acuerdo con los riesgos que se han planteado, si las medidas alternativas empiezan a fallar debido a que el personal no es suficiente o a que la situación se empieza a desbordar–, es un búmeran. Es como decir: «Ah, ¿vieron que esto no servía? Hay que volver a lo anterior». Hay que ser muy cuidadosos para que esas medidas puedan ser realmente exitosas y acordes.

El hacinamiento también se va a abatir por la vía de la no reincidencia. ¿Cómo no la hay? Con educación, trabajo y salud. Una acotación: ¿quiénes hoy sostenemos la alimentación y los elementos de aseo personal y colectivo, así como la indumentaria de las personas privadas de libertad? La familia, en el caso de los que tienen la suerte de tenerla, porque no se otorga ni siquiera hipoclorito. ¿Quiénes tienen familias detrás?

Una minoría de personas. Los privilegiados del sistema, aunque parezca algo raro, son los que tienen una familia detrás. Es un costo que estamos asumiendo las familias.

Nosotros, como asociación, creemos que esta tríada es la que nos permite pensar en un sistema que no hacine, pero por una razón. En realidad, si vamos a castigar y no a rehabilitar, ¡dejémoslo así! Eso sí, tratemos de que la tuberculosis no pase los muros. ¡No sé cómo vamos a hacer, pero tratemos eso y listo! Ahora, si realmente vamos a cumplir con la Constitución y a seguir adelante con el paradigma que el país se ha planteado en materia de sistema penitenciario, entonces todas estas cosas son parte de una misma acción.

**SEÑOR CONDE.-** Soy subjefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial.

Tal vez sea el que cuenta con menos *expertise* en este tema. Los compañeros del INR y todos los demás –hay algunas caras conocidas– pueden hablar, y lo han hecho con absoluta claridad, con más propiedad que yo. Sin embargo, como abogado, y por haber estado de ambos lados del mostrador como operador jurídico en el ejercicio liberal de la profesión, también me animo a aportar alguna cosa. De hecho, frente al Ministerio del Interior, estoy designado como interlocutor con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El enfoque lo voy a empezar por otra punta, por lo que yo llamaría «los otros privados de libertad», los que sufren las consecuencias del hacinamiento en las instituciones carcelarias: nuestros funcionarios. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros, a la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial –en este caso, a mí–, nos toca ver las consecuencias del hacinamiento y de la sobrecarga de trabajo en nuestro personal. Hay juntas médicas reiteradas. El INR tiene una cantidad de funcionarios sobrecargados, que trabaja en un universo, en un mundo, sumamente exigente y estresante. Esto nos da como resultado un porcentaje de funcionarios que terminan con

incapacidades absolutas para el ejercicio de la función, que tienen consecuencias tremendas en su vida laboral y en la de su familia. En algunos casos, ahora está agravado por las modificaciones introducidas por la nueva Ley n.º 20130, que regula un nuevo sistema previsional y sustituye algunas hipótesis que antes derivaban en una jubilación anticipada del funcionario incapaz de realizar su tarea habitual. Ahora pasan a ser cesantes, sin olvidar que detrás de ese funcionario, que ya no va a poder ejercer su trabajo, hay una familia.

Tratando de ensayar una respuesta a las preguntas planteadas, yo venía escuchando a los compañeros y todos, desde su ángulo, me reafirmaron una idea. Si partimos de la pregunta que planteó la compañera sobre cómo combatir el hacinamiento, en todo este tiempo me ha resultado muy difícil desligar o desenganchar las otras dos interrogantes porque tanto el hacinamiento como el sistema de medidas transitorias y la etapa de egreso o pospenitenciaria están estrechamente ligados. Por lo tanto, es muy difícil no hacer referencia a las otras inquietudes y adelantarnos, de alguna manera, a responder las preguntas. No quiero poner la carreta delante de los bueyes, pero es muy difícil.

Como operador jurídico y en mi condición de abogado, considero que es muy difícil abstraerse de no hablar del sistema penal y del sistema procesal penal.

Si bien en 2017 dimos un paso al frente que, a mi juicio, fue importante, sustituyendo aquel paradigma de un Código Procesal Penal inquisitivo por uno acusatorio, me parece que nos quedamos cortos –y lo seguimos estando– en lo que hace al sistema de medidas transitorias o sustitutivas de la cárcel. Muchos docentes y amigos de la facultad –yo con más de veintidós años de ejercicio tuve el honor y la enorme posibilidad de haber conocido grandes juristas en materia de derecho penal y procesal, ni que hablar, como los doctores Tarigo y Preza, entre otros–, indefectiblemente mencionaban la prisión como la última ratio, como la última razón de ser. ¿Por qué?

Porque en el medio hay mucha tela por cortar. Por algo nuestro legislador, muy sabio, en nuestra carta magna estableció que las instituciones penitenciarias deberían ser centros de rehabilitación y no de castigo. Obviamente que la pena, que es parte de la tipificación de un delito, forma parte de la ecuación y que, en muchos casos, debe ser cumplida en establecimientos en los que se priva de la libertad a la persona. Está en nosotros saber el o los filtros previos que debemos tener presentes y mirar un poco el mundo para ver cómo se fortalecen esos sistemas. Digo esto porque no sé si no estamos sacando peores ciudadanos de los que ingresamos. Reitero: en mi experiencia personal del ejercicio de mi profesión también he visto que ese hacinamiento muchas veces se mantiene porque no existe un menú lo suficientemente actualizado a nivel mundial de medidas transitorias o sustitutivas. Incluso, para el caso de las personas que sí efectivamente deben ser privadas de libertad, las actividades que llevan adelante, de reinserción, de reeducación, de estudio y de trabajo, no se valoran adecuadamente.

¿Por qué hablamos de redención de pena? Por ejemplo, yo redimo tu pena, pero mostrame que estás estudiando, que estás tratando de reinsertarte laboralmente para cuando estés afuera; más adelante hablaremos de las oportunidades afuera del portón, que es otro talón de Aquiles. El tema es que cuando vemos que un privado de libertad se esfuerza, estudia, completa sus estudios secundarios o terciarios, en la valoración que se hace de eso hay un impacto que a mi juicio no es lo suficientemente justo en la redención de su pena. Créanme que es una medida que impactaría sensiblemente en el hacinamiento, porque no se trata solamente de tenerlo recluido, privado de libertad, sino de tenerlo más tiempo del que es conveniente. Hoy creo que Rosano decía por qué no se le puede bajar el nivel de control o de fiscalización si viene mostrando que se está reinsertando, si no ha fallado nunca cuando se fue a la policlínica. Se preguntaba por qué no le podía bajar eso. ¿Por qué no puedo demostrarle por mi lado que estoy valorando lo que está haciendo? Eso, hablando de una persona que ya está afuera.

Estando adentro, siempre se llevan planillas donde se escribe, por ejemplo, que se anotó para dar Historia que la tenía pendiente, que estudió, que concurrió a las clases, que dio el examen, que lo salvó. Creo que habría que reevaluar un poco eso para que impactara más rápidamente en una redención de pena, partiendo de la base de que cumplió efectivamente ese tiempo de privación de libertad.

Como ven, no quiero entreverar los tantos, pero una cosa, indefectiblemente, me lleva a la otra y no voy a caer en lo que dijimos todos que necesitamos más plazas, porque es así. Necesitamos más funcionarios, pero qué le voy a decir al INR, ya lo sabemos nosotros. Necesitamos más funcionarios, aunque todos estuvieran sanos y vuelvo a lo del principio. Ustedes se asombrarían de ver la cantidad de funcionarios que nos consultan a través de tutela social policial o incluso de liquidación de retiros y la cantidad de informes que del departamento jurídico saco semanalmente cuando nos preguntan por eventuales derechos jubilatorios de una persona que fue declarada con una incapacidad para el ejercicio habitual de la profesión. Ahora, con el nuevo régimen de la Ley n.º 20130 es horrible. Con la redacción que tenía el artículo 10 de la Ley n.º 18405, la norma sustituida por el nuevo régimen –lo que nosotros llamamos la doble habitualidad–, transcurrido el seguro transitorio por incapacidad parcial, cuando el funcionario era evaluado y en ese momento se encontraba que padecía de una incapacidad para el ejercicio de la función –hablemos concretamente de un funcionario del INR–, a los dieciocho meses se lo evaluaba nuevamente. Si se había recuperado volvía a su función y si no era así permanecía dieciocho meses más, momento en el cual se jubilaba porque no podía continuar ejerciendo su función. Hoy, por la normativa recientemente aprobada, desde el 1.º de agosto del año pasado, cumplidos los primeros dieciocho meses, si se evalúa al funcionario y esa incapacidad continúa, entra en un período de subsidio por otro dieciocho meses más, como una especie de premio, al término de los cuales se lo cesa, no se lo jubila. ¿Por qué? Porque los parámetros de la

seguridad social a nivel mundial que ahora sigue nuestra legislación establecen que una persona incapaz para la realización de su tarea habitual, no es una persona incapaz, es una persona incapaz para ser policía ejecutivo. Es verdad, no puede ser policía ejecutivo, pero tampoco podemos estar dándole una actividad de apoyo a todos los policías ejecutivos porque nos quedamos sin estos o sin personal dentro del INR. Veo la otra punta o las consecuencias del hacinamiento carcelario y no voy a abundar sobre los temas de sanidad. En cuanto a la tuberculosis no tenía una idea tan clara de la falta de atención a ese nivel.

Como ensayo de una primera respuesta propondría una revisión del proceso procesal penal, analizar concretamente qué menú tenemos hoy de medidas sustitutivas y si no habría que agregar alguna más. Todo eso, por supuesto, sin perjuicio de lo que hoy mencionaba el compañero en cuanto a que para una persona que no está sanitaria o psicológicamente en condiciones de ser recluida, está claro que la cárcel no es el destino que debe tener, pero para el resto del universo, ¿qué medidas nos están faltando? ¿Qué medidas sustitutivas nos están faltando? Obviamente, con el debido contralor del Estado y el debido involucramiento de todas las instituciones, muchas de las que están hoy acá: Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Familias Presentes, oenegés.

Después, esa revisión es en dos aspectos. Uno de ellos es ver si no nos está faltando –yo creo que sí– alguna medida más que sustituya la privación de libertad por una también privación de libertad pero de otra magnitud. Comparto lo que decía Rosano hoy. También es privación de libertad la limitación de la vida de uno en familia y en sociedad.

Hay algo muy importante que mencionó la compañera hoy también, que creo es el punto de partida: ¿qué sistema nos queremos dar? Si en realidad queremos seguir diciendo de la boca para afuera que nuestro sistema penal, procesal penal y carcelario es



el de la rehabilitación, pero en la realidad es más punitivo que rehabilitante. Entonces hay que atacar eso. Por tanto, acompañemos nuestras acciones y adaptación normativa a lo que realmente estamos diciendo de la boca para afuera. ¿Nosotros queremos instituciones rehabilitantes o simplemente punitivas? Porque lo que estamos haciendo es punitivo.

Yo creo que la esencia de la respuesta que se me ocurre a la pregunta del allanamiento está en el inicio y en el final de la piola. Está en la cantidad de gente más que nos está entrando y de la cantidad menos que estamos sacando, que nos están quedando en el medio. ¿Por qué nos está entrando más gente? Porque en realidad decimos que estamos hablando de rehabilitación y estamos siendo más punitivos, estamos metiendo más gente. Aumentamos penas, creamos delitos, agravantes específicas, constitutivas. Estamos metiendo más gente, es decir, estamos yendo un poco a contramano de lo que decimos que queremos.

Por otro lado, al final de la piola, no estamos liberando esos cupos, pero no por liberarlos –coincido con lo que se decía– no caer en aquello de que los saco porque no tengo lugar y que todo el mundo vea que acá lo que estamos haciendo es disfrazar una impunidad encubierta. No, porque el mundo lo está haciendo de otra manera mucho más coherente y no se mantiene a la gente más tiempo del que debe permanecer privado de libertad. Ahí es donde entra la revisión del menú de medidas alternativas o sustitutivas, la valoración, en otros términos. Hay privados de libertad que no buscan ni están para nada con estudiar, rehabilitarse o tener algún trabajo. Hay un tema que queda ahí colgado: mejorar las posibilidades de acceso al trabajo durante el período de reclusión. Hay otros que sí, pero yo veo que no se los valora ni se los recompensa debidamente. Tal vez haya optado por estudiar, por trabajar, por cambiar sus hábitos, obviamente a causa de su pérdida de libertad, pero no importa, lo está haciendo, se está

rehabilitando, está demostrando que se puede eventualmente pensar en su reinserción en la sociedad.

Así que por acá me voy quedando. Hay que estudiar por qué estamos metiendo más gente y cómo podemos evitarlo y por qué no estamos antes, durante o después del período de privación de libertad, liberando gente o cesando su privación de libertad a cambio de lo que ha demostrado, que es una actitud de querer reinsertarse en la sociedad.

Les agradezco y olvidé mencionar que esta es mi primera comparecencia ante esta comisión.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** En función de lo expresado, pregunto si alguien quiere agregar algo más sobre estos puntos. ¿No? Perfecto. Para ver cómo nos organizamos o cómo seguimos. Una posibilidad era entrar en la pregunta 3 y la otra es reunirnos el 17 de mayo acá, y capaz que pensando en ser prudentes podemos mandar unos cuantos días antes alguna documentación y la repartimos. También habíamos hablado sobre la posibilidad de invitar a algunas personas puntuales que puedan aportar sobre este tema, concretamente sobre estas tres preguntas.

**SEÑOR PETIT.-** En la reunión anterior se había hablado de invitar a representantes del Servicio de Paz y Justicia; creo que a Nada Crece a la Sombra, que es una organización que está trabajando en Canelones ahora y tiene experiencia, por lo que podríamos invitarlos a participar. Creo que los que concurren por primera vez pueden venir, hacer una apreciación general y dejarlas por escrito, según el caso pueden venir nuevamente y aportar otros elementos, según las preguntas en las que quieran profundizar.

Se podría invitar a Ana Vigna.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Estamos esperando la confirmación.

**SEÑOR PETIT.-** Me parece que Ana Juanche, Luis Parodi y Jaime Saavedra son algunas de las personas –aunque puede haber otras– a las que se les pueden mandar

estas preguntas, invitarlos a una reunión y seguramente van a traer algunos temas específicos.

*(Dialogados).*

**SEÑOR MALVÁREZ.-** Está la fundación Fénix, Las Piedras en Colonia, y la URU que tiene un convenio con el INR y está en varias unidades.

**SEÑOR PETIT.-** Sobre todo porque tienen un proyecto global –no solamente deportivo– de rehabilitación, adicciones, inserción laboral y capacitación.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Ya tenemos la versión taquigráfica de la sesión anterior, que se las haremos llegar, porque puede ser un insumo importante ir leyendo lo conversado porque realmente fue muy rico; esto va a suceder en cada una de las sesiones. Les pedimos disculpas porque esta vez fue muy breve el tiempo, pero prometemos mejorar.

**SEÑORA RODRÍGUEZ.-** Seguramente ya lo hicieron, pero debemos transmitir al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Instituto de Derecho Penal la importancia de su participación acá, porque si en la discusión de hoy hubieran estado presentes, habría sido interesantísimo.

**SEÑORA FERNÁNDEZ.-** Ya fueron convocados, pero hasta el momento no han concurrido. Creo que la Fiscalía concurrió la vez anterior, pero, de todas maneras, no perdemos la esperanza.

De hecho, si bien desde la Suprema Corte de Justicia va a llegar la contestación formal, informalmente me contestan que en tanto que la finalidad es la presentación de un documento a candidatos políticos, el Poder Judicial no va a participar de la mesa, aunque sí van a mandar una contestación formal. Pienso que lo mismo va a suceder con la Fiscalía.

**SEÑORA CAGGIANO.-** Soy Valeria Caggiano, de Anong.

Pensando en esta línea de lo que planteaba la señora Fernández y en la respuesta que ha leído Jimena Fernández, me parece que esa es una de las grandes dificultades que existen en los espacios interinstitucionales cuando se busca hablar de la privación de libertad. Miro a Graciela Riephoff, con quien fuimos durante años compañeras de la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, porque esa siempre fue la pata muy débil a la hora de poder pensar en esquemas, en mejorar, en complementar, en articular, en que simplemente circulara información de calidad entre actores institucionales que dieran respuesta. Gianina Podestá también participó varias temporadas. Esa siempre es la pata que falta en toda esta conversación. Creo que hoy está la respuesta –o la sospecha– de que tiene que ver con un documento que se va a entregar a candidatos, pero, en aras de hacer funcionar mejor el sistema, de poder articular mejor las políticas públicas y los esfuerzos de organizaciones del sistema de Naciones Unidas –Juan Miguel Petit también supo ir a esa mesa representando al PNUD–, nos quedábamos siempre sin esa voz institucional, que tiene tanto que ver con estos temas.

También quiero señalar la ausencia de legisladores que en la instancia pasada sé que estuvieron, pero hay que poder sostener el continuo de conversación, porque después son quienes presentan proyectos de ley, quienes nos entrampan, quienes salen al espacio público y dan conversaciones sobre un sistema del cual no terminan haciéndose cargo. Se terminan haciendo cargo quienes son funcionarios públicos, que tienen el deber –en tanto tales– de cumplir con su tarea y de hacerlo con las herramientas y con los recursos que tienen, pero es una tarea muy frustrante porque da muy pocos resultados en la medida en que hay un mal diseño institucional, de las políticas públicas y de la legislación que dé respuesta a los problemas que tenemos. Entonces, estamos rengos en cuanto a la participación de actores del sistema de justicia –que no es solo el Poder Judicial, sino también la Fiscalía– y del sistema político, que es el que legisla,

pero después son esos otros actores los que tienen que instrumentar y llevar a la realidad concreta –a la afectación de la vida de las personas– este sistema como respuesta, que es el que tenemos.

Luego sucede esto: nos encontramos las mismas personas de siempre, algunas porque su función pública es estar en estos espacios y otras porque nos hemos topado con esta realidad y nos hemos comprometido a tratar de transformarla desde distintos lugares. Somos los mismos quienes siempre terminamos haciendo el esfuerzo, poniendo arriba de la mesa los mismos problemas, a veces más subrayados de un lado y otras menos subrayados de otro, porque alguien en colaboración pudo resolver mínimamente y con muchísimo esfuerzo alguna dimensión del sistema, pero nos falta muchísimo. Hoy, nomás, quienes están presentes y tienen que tomar decisiones pudieron compartir información que es absolutamente desgarradora. Como decía Jorge Camargo, quienes estamos somos los que pensamos en la respuesta a un sistema que administramos y que no perfilamos; no lo dijo exactamente con esas palabras, pero, de alguna forma, está bien claro. Nos encontramos quienes estamos pensando esto –actores protagonistas del sistema y los que podemos ser actores periféricos o en contacto parcial con el sistema– y no están los otros responsables.

Entonces, dado que hay quince días entre reunión y reunión y que pueden estar las versiones taquigráficas disponibles –sé que es un esfuerzo de conversación, tanto para la institución como para la Oficina Comisionado Parlamentario–, creo que habría que tratar de que estos actores institucionales, de alguna forma, vuelvan a sentarse a la mesa. El Poder Judicial es un actor complejo, esboza unas razones, pero en esta misma lógica de invitaciones particulares, de opiniones particulares sobre preguntas puntuales que están contenidas en el documento, se podría pedir la mirada del Poder Judicial, algún análisis con relación a estos ejes, aunque no participe del grupo formalmente. El Poder Judicial es un poder público, quienes trabajan allí también son funcionarios

públicos y, por lo tanto, están obligados a dar su mirada competente en relación con algunas aristas del sistema, sea para quien sea el mensaje. Reitero: están obligados, por su función pública, a emitir su opinión y establecer recomendaciones. En ese sentido, los miro a ustedes, como representantes principales de las instituciones que convocan esta mesa de trabajo, a que los llamen a su responsabilidad institucional.

**SEÑOR PETIT.-** Si les parece bien, puedo tomar la posta y hacer una gestión con alguna ministra de la Corte, tal como se había manifestado en esta mesa. Es verdad que la Corte tiene bastantes problemas para participar en ese tipo de cuestiones, pero es muy importante que esté presente. Acá están en juego nada más y nada menos que la defensa pública. También es fundamental que participe en este asunto el Instituto Técnico Forense; ya quedó hoy de manifiesto. Como dije, voy a intentar hacer alguna gestión.

De todas maneras, quiero decir que muchos de los que estamos acá sabemos que el monstruito del sistema penitenciario es muy jorobado. Es muy difícil mirarlo a los ojos porque es muy, pero muy profunda la oscuridad que hay allí, en todos los sentidos, por ejemplo, en las historias de vida, en las dificultades que acarrearán las personas, los problemas humanos y familiares que tienen. Es muy duro y cada uno lo lleva como puede. No obstante, quiero saltar a una nota más luminosa que esa, y decir que hay mucha gente nueva y joven, una nueva generación de personas que se está involucrando en el tema; de hecho, acá, alrededor de mí hay varios exponentes.

*(Dialogados).*

—Lo que quiero decir es que este es un tema rezagado en muchas partes del mundo, y quienes nos involucramos en esto sabemos que es un tema complicado, que no recibe grandes atenciones, por más que seguramente todos ustedes deben recibir —yo también— alegrías de personas que dicen: «¡Qué bueno que pasó tal cosa!», «¡Qué bueno lo que están haciendo!», «¡Qué bueno ese resultado!». También lo vemos, tampoco son todas pálidas. Hay una gran cantidad de personas nuevas que están ocupando distintos

roles; hay una gran cantidad de instituciones nuevas. Es más: yo creo que en el sistema político ni se tocaba este tema hace veinte años. También es verdad que se hace ahora porque hay una realidad de hierro, que es que hay muchísimas más personas privadas de libertad que antes. Creo que el tema se discute más que antes; está en los programas de los partidos, hay pedidos de información que nos hacen llegar y que seguramente también les lleguen a ustedes. Yo siempre cito una frase de Savater, que es ateo, no religioso, pero que cree, y dice: «El que no cree, no crea». Entonces, no hay ninguna política pública sobre la cual no se crea que puede ser una misión posible. Las misiones imposibles son imposibles, no se van a poder cumplir, y esta no es una misión imposible para héroes suicidas que van a dejar la vida y nada va a ocurrir. No, esta es un área de política pública, en la que puede haber resultados posibles que, como decían los colegas del área de salud, impactan en toda la población, como la bacteria, el virus BK.

Entonces, creo que tenemos motivos para ser optimistas no con lo que está mal, sino con que hay una coyuntura particular que, quizás, nos pueda traer, no digo un nuevo modelo —en ningún tema del debate nacional pasa que se instala un nuevo modelo, y esto no pasa solo en Uruguay—, sino otra cosa. Todos son procesos largos. Quizás —y lo dejo como *leitmotiv* del grupo— podemos pensar en una tercera fase de la reforma penitenciaria. Hubo una primera que la Administración denominó «Reforma penitenciaria» y luego otra, desarrollada en estos años, que se llamó «Dignidad carcelaria».

No vamos a sentarnos a valorar qué pasó en cada de ellas, cuál fue mejor, cuál fue más rápido, cuál fue más lento, cuál cometió tal o cual error o acierto. En mi opinión, claramente, hay motivos para ser optimistas con respecto a que puede haber una nueva fase de reforma penitenciaria.

Se habla de un ministerio de justicia, de autonomía del Instituto Nacional de Rehabilitación y de medidas alternativas. No se hablaba de esas medidas.

Iba a preguntar acerca de la ratio por país de medidas alternativas privadas de libertad y se lo dejo como deber a Fabián Rosano. Creo que el de Uruguay está muy debajo; no llega a tener una medida alternativa por un privado de libertad. Considero que, perfectamente, podemos tener dos medidas alternativas por uno.

**SEÑOR ROSANO.-** Dos medidas alternativas cada tres privados de libertad.

**SEÑOR PETIT.-** Bien.

En fin. Creo que podemos agarrarnos de cosas alentadoras y aportar nuestro granito de arena. Me parece que no sería algo menor confeccionar un documento surgido de una cantidad de actores. Ojalá que puedan ser la mayor cantidad posible.

Va a quedar una cantidad de temas y discusiones pendientes, de cosas en las que, seguramente, no todos estamos de acuerdo. Incluso pienso que también dentro de mi propia oficina hay cosas en las que podemos tener matices y diferentes opiniones, pero considero que nuestro granito de arena puede estar en aportar ese documento.

A su vez, no está nada mal tener nuestro espacio en el que los colegas hablamos, intercambiamos, hacemos un poco de catarsis y renovamos un poco la fe porque, sin eso, no se cambia nada.

**SEÑOR CONDE.-** Me parece que se mencionó, pero creo que estaría bueno cursar la invitación –creo que ya se hizo– al Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Udelar y también al Instituto Uruguayo de Derecho Procesal.

*(Dialogados).*

Finaliza el evento.

*(Son las 16:34).*